

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

| | |
|-------------------------|---|
| DEMANDANTE | Jairo de Jesús Olarte Agudelo |
| DEMANDADAS | i) AGUASCOL S.A. E.S.P. ii) Departamento de Antioquia iii) Colpensiones |
| RADICADO UNICO NACIONAL | 05001-31-05-015-2018-00298 03 |
| TIPO DE PROCESO | Ordinario |
| DECISIÓN | Confirma |
| ACTA DE DECISIÓN | 168 de 2022 |

Medellín, veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante, contra la decisión del 7 de junio de 2022 que niega decreto de pruebas.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

En la audiencia del artículo 77 del CPT y de la S.S., propiamente en la etapa de decreto de pruebas, el apoderado de la parte demandante solicitó se decreten exhortos y testimonios, para demostrar que el Consorcio AGUASCOL y AGUASCOL S.A., como se llama actualmente, son la misma entidad jurídica. Al respecto indicó:

“Teniendo en cuenta que posterior a la fecha en que AGUASCOL presenta la contestación, se observa que ellos manifiestan en la contestación que desconocen la relación laboral que tuvo con el demandante, sin embargo ellos manifiestan que la relación que tuvo el demandante fue con el Consorcio AGUASCOL ARBELÁEZ, sin embargo vemos que ellos manifiestan que son sociedades diferentes, el Consorcio AGUASCOL ARBELÁEZ y actualmente se llama AGUSACOL S.A. también, es decir que guardan la misma armonía en la denominación, este apoderado solicitó se decretaran unos testigos, igualmente se solicitó se exhortara porque se hicieron los derechos de petición por parte de este apoderado con la finalidad de buscar la verdad, se enviaron unos derechos de petición al municipio de Caucasia con el fin de que explicaran cómo había sido la transición entre AGUASCOL ARBELÁEZ y AGUASCOL ARBELÁEZ S.A. para que explicaran y a la fecha no hemos tenido respuesta, entonces solicito...se decreten estos exhortos y se decreten los testigos para demostrar también que el Consorcio AGUASCOL y AGUASCOL S.A. como se llama actualmente son la misma entidad jurídica, simplemente que hicieron una transición con el fin de desconocer derechos laborales, igualmente el municipio de Caucasia debe certificar cómo fue esa transición entre el Consorcio AGUASCOL ARBELÁEZ y AGUASCOL ARBELÁEZ, por eso se presenta prueba sumaria porque son pruebas y hechos que aparecen con posterioridad a la contestación de AGUASCOL y este apoderado con el fin de controvertir las pruebas y lo dicho por la entidad realizó la gestión y le demuestra al despacho prueba sumaria para que así sean decretados de que se ha hecho realmente la gestión. Entonces solicito...se decreten estos exhortos”.

Prueba que fue negada por la *a quo* al no ser solicitada en la demanda, que es la oportunidad procesal oportuna.

RECURSO DE APELACIÓN

Ante tal negativa el apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación indicando:

“Es un hecho sobreviniente que esta parte avizora cuando AGUASCOL contesta la demanda por las siguientes razones. Primera, el demandante tiene la certeza que trabajó con AGUASCOL... posteriormente tiene sus transformaciones que suelen

sucedir en todas las empresas para desconocer los derechos laborales. En el presente caso, antes se llamaba según lo que dice la entidad demandada Consorcio AGUASCOL ARBELÁEZ, posteriormente se llama AGUASCOL S.A., sin embargo, mantiene la denominación ARBELÁEZ, es decir, que podemos decir que son la misma persona jurídica, simplemente que se transformaron para desconocer derechos laborales, este hecho se conoce con la contestación de la demanda, es decir, que mi representado no tenía por qué saberlo porque él simplemente conocía que AGUASCOL permanecía en el tiempo, es por esa razón que este apoderado de manera diligente, y tal y como lo ordena el CGP, mandó derecho de petición al municipio de Cauca, que no ha sido atendido, y se solicitaron pruebas testimoniales para demostrar que Consorcio AGUASCOL y AGUASCOL S.A., la entidad que hoy está presente y que hoy continua son la misma persona jurídica, es decir, que en este caso lo que pretende la entidad demandada es defraudar los derechos laborales, y por eso tiene una razón...probablemente la prueba testimonial que traía AGUASCOL son trabajadores que les ha tocado y con los testimonios podrían indicar que son la misma persona jurídica, por eso cuando solicito la prueba también señalo jurisprudencia que es pertinente y útil para el proceso para resolver las peticiones que este apoderado realiza, y en este caso señalo la sentencia SL514 de 2020 con radicado 79953 del 12 de febrero de 2020....donde se manifiesta que es claro que el derecho laboral está basado en verdades reales, y en el presente caso no es proferir una sentencia con lo que hay, sino buscar la verdad real dado que este apoderado...le está diciendo señor juez, acá me están diciendo que es Consorcio AGUASCOL ARBELÁEZ y AGUASCOL ARBELÁEZ S.A. son la misma denominación, simplemente que cambio de consorcio, cambiaron de matrícula, igualmente de NIT, entonces qué pasó en esto, por eso consultémosle al municipio. Por eso solicito muy respetuosamente se me conceda el recurso de apelación al TSM para que decida la situación toda vez de que el derecho laboral está basado en verdades reales, es un hecho sobreviniente que se debe de buscar en el presente proceso, este apoderado no lo conocía y viene a resaltarse con la contestación de AGUSACOL cuando lo manifiesta en los hechos y desconoce la relación con el demandante. Por eso solicito se me conceda el recurso de apelación frente a las pruebas negadas en este caso”.

Preliminarmente se hace necesario exponer que, corrido el traslado para alegar, ninguna de las partes presentó alegaciones ante esta instancia.

PROBLEMA JURÍDICO

Teniendo en cuenta la decisión adoptada y la inconformidad del recurrente, habrá de establecerse si hay lugar o no a decretar las pruebas pretendidas por el apoderado de la parte demandante.

CONSIDERACIONES

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

La demanda fue presentada contra i) AGUASCOL S.A. E.S.P. ii) Departamento de Antioquia y iii) Colpensiones, con acta de reparto del 4 de mayo de 2018. Trabada la litis, en memorial del 11 de agosto de 2021, la parte demandante solicitó “se exhorte al departamento de Antioquia (AQUANTIOQUIA) y al municipio de Caucasia para que nos certifique que relación existió entre el consorcio AGUASCO LARBELÁEZ y la empresa AGUASCOL ARBELÁEZ SA. ESP, quienes eran los socios, o fundadores, como fue la transición entre AGUASCOL ARBELÁEZ Y AGUASCOL ARBELÁEZ SA. ESP y quien conformaban el consorcio AGUSACOL ARBELÁEZ.”

Así mismo, en memorial del 14 de diciembre de 2021 solicitó se decrete prueba testimonial “toda vez que al realizar indagación sobre CONSORCIO AGUASCOL ARBELÁEZ Y AGUASCOLARBELÁEZ SA. ESP según las versiones de los trabajadores que prestaron los servicios personales en ambas personas jurídicas son lo mismo, lo que las diferencia es la denominación SA. pero son lo mismo y CONSORCIO AGUASCOL ARBELÁEZ paso a ser AGUASCOL ARBELÁEZ SA. ESP”.

Pues bien, resulta claro que en materia laboral, la oportunidad para solicitar o aportar pruebas corresponde a la demanda, la corrección o enmienda que se haga de ella dentro del término dispuesto en el artículo 15 de la Ley 712 de 2001 que modificó el artículo 28 del C.P.T y de la S.S, que a la letra dispone:

“Antes de admitir la demanda y si el juez observare que no reúne los requisitos exigidos por el artículo 25 de este código, la devolverá al demandante para que subsane dentro del término de cinco (5) días las deficiencias que le señale. La demanda podrá ser reformada por una sola vez, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término del traslado de la inicial o de la de reconvencción, si fuere el caso.

El auto que admita la reforma de la demanda, se notificará por estado y se correrá traslado por cinco (5) días para su contestación. Si se incluyen nuevos demandados, la notificación se hará a estos como se dispone para el auto admisorio de la demanda.”

En este evento no existe discusión que la solicitud de incorporación de nuevas pruebas fue extemporánea, sin que pueda justificarse su petición en el cambio de denominación de una de las entidades demandadas al que alude el demandante, pues ello implicaría que cada vez que suceda una modificación de tal naturaleza sea permitido solicitar el decreto o aporte de nuevos medios de convicción, lo que a todas luces atentaría contra el debido proceso y la seguridad jurídica respecto a las normas que gobiernan cada etapa procesal, e igualmente conllevaría desconocimiento del principio de preclusión, luego, es claro que la decisión del juez fue acorde a las disposiciones vigentes.

Ahora, ciertamente en virtud del artículo 54, del estatuto procesal laboral, el juez tiene la facultad de decretar y practicar pruebas de oficio, así lo establece la disposición en cita: “además de las pruebas pedidas, el juez podrá ordenar a costa de una de las partes, o de ambas, según a quien o a quienes aproveche, **la práctica de todas aquéllas que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos.**” (resalto fuera del texto)

En ese orden de ideas, será el juez de conocimiento, como director del proceso, y no por orden de esta Corporación o a ruego de la parte, quien si lo considera indispensable, podrá en este caso, atendiendo a las situaciones fácticas, fundamentos de derecho y jurisprudenciales planteados y para mejor proveer, decretar y practicar otras pruebas que eventualmente discurra pertinentes, ello teniendo en cuenta, que en material laboral se busca la verdad real por encima de la meramente formal, y precisamente en virtud a la naturaleza tuitiva del derecho del trabajo y de la seguridad social, el juez debe actuar para superar las deficiencias probatorias o de gestión judicial que puedan presentarse a fin de evitar una irreparable decisión de privar de un derecho a quien realmente se le debe reconocer.

Sin que pueda perderse de vista, tal y como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional que, el funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente: (i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer asuntos indefinidos de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material.¹

Lo que se armoniza con la unificación de jurisprudencia sobre facultades oficiosas en materia probatoria de los jueces laborales, que estableció la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-219 del 06 de mayo de 2021, en la cual se recuerda que en los casos en donde “de no acudir a nuevos elementos probatorios la sentencia final sea contraria a los postulados de la justicia o a la naturaleza tutelar del derecho laboral”, decretar y practicar pruebas de manera oficiosa pasa de ser una facultad a ser un imperativo para el juez.

Con la jurisprudencia especializada, la cual es clara al indicar que “Si surge duda razonable y fundada sobre la existencia o vigencia de las relaciones de trabajo sobre las que se edifica un reclamo de mora patronal en el pago de cotizaciones, le corresponde al juez esclarecerlas mediante el ejercicio de su deber oficioso de decretar y practicar las pruebas necesarias para alcanzar la verdad real”, así lo ha indicado la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia entre otras, en las siguientes sentencias:

- SL3160-2019 del 6 de agosto de 2019
- SL514-2020 del 2 de febrero de 2020
- SL1372-2020 del 11 de marzo de 2020
- SL3692-2020 del 26 de agosto de 2020
- SL3807-2020 del 9 de septiembre de 2020
- SL5081-2020 del 14 de octubre de 2020
- SL4816-2020 del 4 de 11 de 2020

¹ Sentencia T-113-2019

Luego, atendiendo a lo anterior, es el juez quien tiene plenas facultades, sí en su momento lo considera pertinente y necesario, decretar las pruebas de oficio para esclarecer y hallar la verdad real, sin que sea viable ordenarlo por esta Corporación, dado que se está ante una **facultad oficiosa**, por lo que tampoco es dable atender las solicitudes extemporáneas en tal sentido formuladas por las partes, y la oficiosidad no permite, a juicio de la sala al superior, imponerla.

Dado lo anterior, habrá de confirmarse la decisión objeto de apelación.

Sin costas en esta instancia al no haberse causado.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión revisada en apelación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**. Se ordena incorporar este auto al expediente y regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**
Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 151 de agosto 26 de 2022
consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b04a5d8593fecf0187cd1499436bf53a11e64a56575d68d26de0b06ebf71fa42**

Documento generado en 25/08/2022 02:10:05 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>